

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 19º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-6944-2019
CARATULADO : ROJAS/CONSEJO DE DEFENSA DEL
ESTADO/FISCO DE CHILE

Santiago, veinticuatro de Abril de dos mil veinte

VISTOS:

Con fecha 18 de febrero del 2019, a folio 1, compareció **don Mario Armando Cortez Muñoz**, abogado, en representación judicial y convencional de **don Eduardo Osciel Rojas López**, pensionado, ambos domiciliados para estos efectos en calle Carmen 602 departamento 2611, comuna y ciudad de Santiago, quién viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, **doña María Eugenia Manaud Tapia**, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1687, comuna y ciudad de Santiago.

Con fecha 21 de marzo del 2019, a folio 6, fue notificada personalmente la demandada del contenido de la demanda y su proveído.

Con fecha 11 de abril del 2019, a folio 9, se tuvo por evacuada la contestación de la demanda y se dio traslado a la réplica;

Con fecha 18 de abril del 2019, a folio 11, se tuvo por evacuado el trámite de la dúplica por la demanda y se dio traslado a la dúplica.

Con fecha 30 de abril del 2019, a folio 13, se tuvo por evacuado el trámite de la dúplica.

Con fecha 15 de mayo del 2019, a folio 14, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 12 de septiembre del 2019, a folio 37, encontrándose la causa en estado, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 18 de febrero del 2019, a folio 1, compareció **don Mario Armando Cortez Muñoz**, abogado, en representación judicial y convencional de **don Eduardo Osciel Rojas López**, pensionado, deduce demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de mayor cuantía en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente por la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, **doña María Eugenia Manaud Tapia**.

Al exponer los fundamentos de hechos de la demanda, se agrega el relato directo de don Eduardo Osciel Rojas López, comienza su narración, contando que siempre fue y ha sido militante del partido Comunista y a causa de su militancia fue vigilado y perseguido durante toda la dictadura militar.

Con fecha 15 de marzo de 1981 ocurrió su detención por civiles en su domicilio en calle Loa N°2863, población 23 de marzo, ciudad de Calama. Ese día cuando entro a su casa, vio a



Foja: 1

varios hombres sentados en el su comedor con pistolas y metralletas sobre la mesa. Uno de ellos estaba escondido y salió justo detrás de él y lo empujó hacia adentro, tirándose todos para agarrarlo para golpearlo, sin que haya medida alguna palabra de su parte. Todo lo que ocurrió fue muy rápido, lo tiran al suelo, lo dejan de golpear y le preguntan en dónde están las armas o si tenía panfletos en contra de la dictadura. Cree que por esa razón lo golpearon mucho, pues ellos buscaban una imprenta, que él no tenía. Ellos, además de revolver la casa por completo, le robaron sus ahorros en dinero que tenía guardado en la casa, sus herramientas de trabajo por su oficio de electricista en minería, que para esa época eran muy sofisticadas.

Fue subido a un vehículo y traslado medio inconsciente (a causa de los golpes que le habían dejado) a un cuartel de la C.N.I. Al llegar al lugar, volvieron a golpearlo a palos, combos, patadas. Le sacaron toda la ropa y fue dejado totalmente desnudo. Se sintió indefenso en una posición de debilidad enorme. Lo llevaron arrastrando al baño, lo dejaron en el piso mientras llenaban una tina de baño con agua. Al terminar de llenar la tina con agua, un sujeto entra y le coloca una capucha. Indica que no pudo ver su rostro porque levantar la cabeza significaba más golpizas. Entraron varios más y se reían entre ellos, comenzaron a hacer el submarino por mucho rato, metiendo su cabeza a la tina de agua, ahogándolo. Transcurrieron muchas horas, además que con la capucha no podía respirar, tragó mucha agua y sintió la desesperación de estar ahogándose, sin respirar y sin poder moverse. Estaba esposado de manos y amarrado de pie, mientras se ahogaba y lo golpeaban por la espalda con palos en la parte de atrás de la espalda, las piernas y las plantas del pie. En algún momento, fue tanta su desesperación por respirar que dejó de sentir los golpes. Le preguntaban, cada vez que sacaba la cabeza del agua le decían: *“habla concha de tu madre, ¿dónde están las armas?, ¿dónde hacen la propaganda?, ¿quiénes son los que la hacen?, ¿dónde esconden las armas concha de tu madre?, ¿quiénes son tus cómplices?, te vamos a matar aquí mismo si no hablas”*.

La tortura terminó y fue arrastrado a una habitación en que perdió la conciencia en varias oportunidades, siendo sus memorias de ese trauma entrecortadas. Recuerda que estaba esposado, amarrado de pies, encapuchado, desnudo y frente de él se rieron. Describe sus palabras en el siguiente tono: *“por qué bañaron a este concha de su madre, estaba muy hediondo el culiao, mira la hueaita que tiene, la tiene chica”*. Al mismo tiempo lo golpearon en los testículos y las lágrimas le salieron solas.

Fue levantado y comenzaron a colocar electrodos en todo su cuerpo (cabeza, brazos, genitales, etc.). Recibió descargas de corriente eléctrica en todo su cuerpo una y otra vez. Cada cierto tiempo fueron tan fuertes que se desmallaba, mientras le decían *“vo soy electricista culiao así que teni que aguantar la corriente”* Se reían de eso a toda boca y su única explicación hasta el día de hoy para ese actuar es que esos sujetos estaban drogados. Movían los electrodos por varias partes de su cuerpo hasta que todos terminaron en su cabeza y hubo un golpe tan fuerte que salto lejos, choco con los torturadores y la máquina usada para disparar corriente eléctrica se quemó. Lo inculparon de arruinar la máquina y lo siguieron golpeando, desmayándose finalmente.

Pensó que ya estaba muerto, pasaron muchas cosas extrañas en su cabeza. Uno de esos sujetos entró y le dijo que habían acabado de violar a su mujer e hija, le dijeron un montón de cosas respecto de ellas, describiendo lo que le habían hecho, mientras se reían. No fue verdad, solo dijeron esas mentiras para aumentar su tormento.

Estuvo en ese recinto hasta el día 20 de marzo del mismo año, siendo posteriormente trasladado a Antofagasta. En ese lugar, fue llevado a la Escuela de Carabineros, dónde otra vez fue golpeado hasta perder la conciencia. Tanto fue el dolor por los golpes que todo le dolía. No sabe cuántas veces se desmayó por las golpizas y torturas sufridas. En una de las ocasiones en que fue golpeado, estando totalmente desnudo, esposado de mano y amarrado de pies, fue llevado a un baño, lugar en que fue interrogado y en que fue forzado a comer el excremento que había en la taza del baño. Un sujeto se lo puso en la boca, lo forzó a abrirla, ordenando que lo comiera, que lo iba a matar. Para eso le puso una pistola en su cabeza. Fue tanto que hasta a los sujetos que estaban en el cuarto les dio asco y empezaron con náuseas. Ellos salieron asqueados del baño, diciendo *“hueon cochino”* a él, como verdaderos enajenados mentales y lo dejaron



Foja: 1

sólo. Vomitó por todos lados y cuando se alejaron, se puso de pie como pudo. Fue tanto su asco que la barra de jabón que había en el lavamanos se la empezó a comer para lavarse la boca y siguió vomitando.

Lo dejaron tranquilo solo por un par de horas, puesto que se lo llevaron a una habitación esposado y encapuchado. En ese lugar lo subieron a una mesa, muy fría. Él se imagina que es mármol por la textura y lo helado. Fue colocado boca arriba y dejan apoyadas en la mesa la parte inferior de su cuerpo y su tronco quedo en el aire. Cada vez que lo interrogaban, le soltaban el tronco y debía aguantar para que no se le quebrara la espalda, pero le enterraban un fierro justo en el ombligo. Esta tortura duró horas que para él fueron eternas. Hoy en día tiene una hernia a la altura del estómago y cree que fue por eso.

Estuvo en ese lugar hasta el día 21, luego fue trasladado a la cárcel de Antofagasta en dónde estuvo hasta el día 01 de agosto de ese mismo año. Después fue enviado a la cárcel de La Serena en que estuvo hasta el día 04 en dónde pasó a la Penitenciaría de Santiago hasta el 30 de agosto. Fue llevado a la cárcel de Concepción hasta el día 04 de septiembre y terminó en la cárcel de Lautaro hasta el 8 de septiembre del año 1981. Durante todos esos meses fue constantemente golpeado, torturado y amenazado. Finalmente estuvo relegado en Lautaro, dónde fue perseguido y vigilado durante toda la dictadura militar.

Estos hechos, significaron perder su familia, su trabajo y su vida cambió para siempre. La pareja que tuvo en ese tiempo estaba embarazada de un hijo suyo. Ella se asustó, se escondió y encontró otra persona. Así que pudo ver a su hijo después de muchos años.

Su hermana Ivonne Rojas presentó un recurso de amparo en el mismo mes que fue detenido, en marzo de 1981, con el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Calama.

Estima que la vida del demandante fue violentamente interrumpida por el accionar de agentes del aparato estatal, de tal entidad en cuando a la falta de humanidad, abuso y violencia que lo transformaron en una víctima derechos humanos por delitos de lesa humanidad cometido por agentes del Estado.

Alega que un Estado que se diga democrático, por ser tal, debe indemnizar a todo ciudadano que haya sido sometido a los vejámenes físicos y morales que con ocasión de detenciones ilegales, torturas y ejecuciones que hayan provocado sus agentes, ya que denegar la reparación del daño moral que subsistirá en las víctimas y sus familiares, es obligarlos a seguir soportando el injusto permanentemente.

Así, al estructurar los fundamentos de derecho que hacen procedente la demanda, indica que la responsabilidad del Estado en Chile es un principio general del ordenamiento jurídico, reconocido en la Constitución Política del Estado de 1980 en la ley de Bases Generales de la Administración del Estado y otras cuerpos legales del Derecho Público, en virtud del cual el poder público se sujeta al imperio de la ley no solo por medio de los controles judiciales de legalidad de los actos administrativos o de los controles extrajudiciales de naturaleza política o social existentes, sino también porque resulta necesario reparar o indemnizar los daños que la actividad jurídica y material Administración y el Estado en general, cause a los particulares en su persona o propiedad, en razón del deber que se le ha impuesto de garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. A mayor abundamiento, cita el concepto de responsabilidad del Estado del profesor Eduardo Soto Kloss, señalando que su carácter es constitucional y no civil, no teniendo por finalidad el castigo al culpable, sino a mantener el ejercicio de la función estatal en su integridad y plenitud, tal como se encuentra consagrado de modo genérico en los artículos 6° y 7° de la Carta Política.

Por otra parte, indica que establecido el principio que los Estados tenían una obligación erga omnes respecto de los derechos fundamentales, el Derecho Internacional Público elaboró un cuerpo de normas tendientes a definir, identificar y castigar aquellos delitos de lesa humanidad, cometido por los Estados en contra de civiles. En nuestro ordenamiento jurídico interno tiene su



Foja: 1

reconocimiento mediante la publicación de la Ley N°20.357 que Tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra. En tal sentido, en el entendido que los crímenes de lesa humanidad son el ataque generalizado y sistemático de carácter inhumano que causa impune e intencionalmente gran sufrimiento y lesiones físicas y psíquicas a la población civil, por actos cometidos por el Estado o sus agentes o particulares que actúan bajo su instigación o tolerancia, tal como se encuentra consagrado en el jus cogens y el derecho humanitario, estima que los padecimientos y dolores sufridos por su representado constituye un hecho ilícito que se encuadra en los crímenes que se califican de lesa humanidad.

Establecido lo anterior, aduce que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad civil, ni tampoco aplicar al caso concreto el derecho común, en cuanto a prescripción, toda vez que debe observar las obligaciones que emanan de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, tal como lo consagra la Constitución Política de la República en su artículo 5° inciso segundo y artículo 6°, pudiendo en su condición de Estado que pertenece a la comunidad internacional, ser declarado responsable en instancias internacionales en la forma dispuesta en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para efectos de reforzar su argumento, cita extensamente la causa Rol C-803-2009, caratulada “*Eliécer Segundo Valencia Oyarzo y otros con Fisco de Chile*”, dictada con fecha 07 de enero del 2013 por el 18° Juzgado Civil de Santiago.

Señala que tanto la doctrina como jurisprudencia mayoritaria coinciden que el daño moral no requiere prueba, en tanto la víctima acredite la lesión del bien personal que infirió el daño. En el ámbito de violación a los derechos humanos, acude a lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para fundar el deber de responder por la vulneración a los derechos humanos.

Al haber sido don Eduardo Osciel Rojas López víctima de detención ilegal y arbitraria, crueles torturas, apremios físicos y psicológicos crueles, inhumanos y deliberados, sufriendo persecución política por parte de agentes del Estado, sin haber tenido posibilidad de haber tenido un proceso judicial sin vicios y siendo sancionado en razón de sus ideas políticas, sin lugar a dudas padeció grandes vejaciones y violación en sus derechos humanos que generaron un gran daño en su vida emocional, personal y laboral, que han hecho que don Eduardo hasta el día de hoy, no pueda llevar una vida normal a pesar de los esfuerzos que ha realizado por ello, toda vez que sigue siendo atormentado por lo vivido.

Hace presente que, por la clase de situaciones que se han descrito, la Asociación de Magistrados del Poder Judicial tuvo la altruista conducta de pedir perdón a las víctimas y deudos por sus acciones y omisiones en la dictadura, reconociendo que claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal, señalando inclusive el haberse negado a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención. Indica que hoy en día las víctimas como don Eduardo Rojas López, tienen confianza en que serán escuchados y amparado por el Poder Judicial.

Por último, en base a lo precedentemente expuesto, solicita que se tenga interpuesta la demanda, acoger su tramitación y condenar al demandado, ya individualizado, a pagar la suma de **\$300.000.000.- de pesos**, más intereses, reajustes legales, con costas o, en su defecto, lo que esta Magistratura estime en derecho.

SEGUNDO: Que con fecha 08 de abril del 2019, a folio 7, compareció **doña Ruth Israel López**, abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del **Fisco de Chile**, a fin de evacuar la contestación de la demanda.

Interpone como primera excepción, la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido el demandante, ya indemnizado. En el contexto del ámbito de la *Justicia Transicional*, se presenta el dilema de la justicia versus paz, puesto frente a la solicitud de amnistías generales para la tranquilidad de un país, se debe lidiar con la necesidad que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado, a fin de declarar imperiosamente



Foja: 1

“*nunca más*”. En esa perspectiva, por una parte, cualquier transición es un proceso en el cual se deben definir las proporciones de sacrificio de los bienes en juego dentro de este dilema.

Por otra parte, no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Recordemos que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. Así, las negociaciones de reparación entre el Estado y las víctimas revelan que tras la (sic) *reparación* existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos, lo que se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación, los cuales incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

En el caso de la transición del país, los objetivos del gobierno del Presidente Patricio Aylwin fueron: “(a) *el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse*” (Elizabeth Lira, *The Reparations Policy for Human Rights Violations in Chile*, en de Greiff, Pablo ed. *The Handbook of Reparations*. Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 56).

Así, a fin de alcanzar el segundo objetivo, en la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, más conocida como *Comisión Rettig*, propuso entre las propuestas de reparación, “*una pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas y algunas prestaciones de salud, las cuales se concretaron mediante la promulgación y publicación de la Ley N°19.123 que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, cuyo mensaje expresamente se indica como objetivo “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”; entendiendo como reparación “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe” en que debe ser convocada y concurrir la sociedad chilena en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas*”. De este modo, se transforman en claros objetivos de la Ley N°19.123, la *compensación de los daños morales y la mejora patrimonial*, tal como consta en la historia fidedigna de su establecimiento y lo señala expresamente su artículo 18.

Siendo el objetivo la reparación, la Ley N°19.123, con sus normas conexas (ejemplo Ley N°19.992 de víctimas de tortura), se plasman los mecanismos mediante los cuales el Estado de Chile ha afrontado el proceso de justicia transicional y concretado la reparación moral y patrimonial a víctimas de violaciones a los derechos humanos, principalmente a través de tres clases de compensaciones: a) *Reparaciones mediante transferencias directas de dinero*; b) *Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas*; y c) *Reparaciones simbólicas*.

Las reparaciones mediante transferencias directas de dinero ha significado para el Estado al mes de diciembre del año 2015 el costo en total de **\$706.387.596.727.- de pesos**, desagregadas en: a) **pensiones**: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig); b) **pensiones**: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); c) **bonos**: la suma de \$ 41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992; d) **desahucio** (bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-; **bono extraordinario** (Ley 20.874) por la suma de \$21.256.000.000.-

Las reparaciones específicas mediante transferencia monetaria directa al amparo de la Ley N°19.992 y sus modificaciones posteriores, fueron establecidas mediante una pensión anual



Foja: 1

de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años.

En el caso concreto, el demandante ha recibido pensión, por concepto de Ley N°19.992, percibiendo desde el 01 de febrero del 2005 al 30 de marzo del 2019, la suma de **\$25.078.051.- de pesos**, además por concepto de aguinaldo recibido durante todo ese periodo alcanza el total de **\$433.135.- de pesos**. Adicionalmente, cabe consignar que el demandante recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley N°20.874, por **\$1.000.000.- de pesos**, sumando todos esos aportes una suma total de **\$26.511.226.-**

En cuanto a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, tal como corresponde en todo proceso de justicia transicional, se debe además de las transferencias monetarios, garantizar a todas las víctimas que reciban algún tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las **prestaciones médicas** otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura. Igualmente se incluyeron **beneficios educacionales** consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, por ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas. Asimismo, fueron concedidos **beneficios en vivienda**, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Las reparaciones simbólicas aludidas, son relevantes para la reparación de los daños morales causados a víctimas de derechos humanos mediante la realización de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor -siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral, toda vez, tal como lo sostiene la doctrina, su indemnización tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. En tal sentido, en la tarea de entregar dicha compensación, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, consistente: **a)** La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; **b)** La declaración del Día Nacional del Detenido Desaparecido el día 30 de agosto de cada año en atención a que ha sido instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido. Fue establecido mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006; **c)** La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, inaugurada el 11 de enero de 2010, que da cuenta en las imágenes, íconos, documentos y/o documentos del lugar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 **d)** El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; **e)** La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH, destacan Villa Grimaldi, “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio Tres de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el "Memorial en homenaje a los



Foja: 1

Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama" en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el "Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos" en la Plaza de Armas de Curacaví; el "Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista" en la sede de este partido; el "Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca" en esa ciudad; y el "Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas" en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Expresado lo anterior, al haber cumplido el Estado todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y provisto indemnizaciones acordes con la realidad económica del país a las víctimas de derechos humanos, ha precisamente compensado los daños, no solo morales, sino también patrimoniales, ocasionada por los mismo hechos, no siendo procedentes que sean compensados nuevamente, tal como ha sido declarado por la Excelentísima Corte Suprema en causas Rol 4753-2001, caratulados "*Domic Bezic, Maja y otros con Fisco*"; Rol 4742-2012 "*Rivera Orellana, Flor y otros con Fisco de Chile*"; Rol C-1963-2005, caratulados "*Espinoza Figueroa y Rioseco Espinoza con Fisco de Chile*". En el mismo sentido se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Almonacid Arellano y otros vs. Chile*.

A continuación, interpone como segunda excepción la prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios prevista en el artículo 2332 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en el 2497 del mismo cuerpo legal, puesto que los hechos relatados por el demandante ocurrieron desde el 15 de que la prescripción estuvo suspendida desde el inicio de la dictadura militar (septiembre de 1973) hasta el retorno a la democracia (21 de marzo del 2019) y, aun así, ha transcurrido igualmente el plazo de prescripción extintiva de cuatro años, del citado artículo 2332.

En subsidio de lo anterior, alega la prescripción extintiva de 5 años, contemplada en los artículos 2515 en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil porque la fecha en que habría sido exigible el derecho a indemnización y hasta la notificación de la presente demanda, transcurrió con creces el plazo indicado.

Argumenta que todos los derechos y acciones son prescriptibles, siendo el caso contrario excepcional, requiriendo declaración legal expresa que en el caso de autos no existe. Estima que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible resulta una situación grave y perturbadora. Señala que se debe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público que se extiende a todo el ordenamiento jurídico y no solo al derecho privado, tal como lo previene el artículo 2497 del Código Civil en cuanto al plazo de prescripción a favor y en contra del Fisco, afectando la prescripción igualmente a las personas jurídicas de derecho público, no obstante regirse por leyes y reglamentos especiales (artículo 547 inciso 2° del Código Civil).

Resalta el fundamento jurídico de la prescripción en cuanto a dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Tiene por destino el resguardo de un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, resultando ser una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social.

En ese orden de ideas, opina que resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. Indica que la prescripción no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a indemnización, solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.



Foja: 1

Asimismo, estima que no existe un conflicto normativo entre la Constitución Política y el Código Civil, por no existir textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada.

Para efectos de reforzar la alegación que la acción de autos se encuentra prescrita, cita la sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 21 de enero del 2013 en causa Rol 10665-2011 “*Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno*”, sobre que la prescripción es un principio general y que los tratados internacionales de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil. En ese orden de ideas, se concluye en la sentencia que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción, debe ser aplicado el derecho común, además estima el plazo de prescripción no debe contarse desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con información para hacer valer su derecho de resarcimiento.

Por otra parte, señala que teniendo la indemnización de perjuicios un carácter netamente patrimonial, la acción destinada a exigirla comparte el mismo carácter, en cuanto a los actos de disposición que se puede ejercer sobre ella (renuncia y transacción) y a la aplicación de las normas del Código Civil, por tanto, la acción está expuesta a extinguirse por prescripción, ya que no es sino una suerte de renuncia tácita por no haberse ejercido en su oportunidad.

Agrega como argumento en su impugnación que Tratados Internacionales como la *Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra de 1949, Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas*, no señalan expresamente que las acciones civiles indemnizatorias tienen un carácter imprescriptible, sino que aluden a aquéllas acciones penales derivadas de los crímenes de guerra y lesa humanidad. Igualmente, *la Convención Americana de Derechos Humanos*, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria porque hizo uso del derecho a reserva, reconociendo competencia de la CIDH de los hechos posteriores a la fecha de su depósito, esto es, al día 21 de agosto de 1990, o en todo caso, hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a marzo del año 1990.

A mayor abundamiento, indica que el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, no encontrándose dirigida a los Tribunales del país, los cuales deben aplicar el derecho interno nacional, como la institución de la prescripción, según la normativa nacional. Señala que la Excma. Corte Suprema ha desestimado la aplicación del mencionado artículo 63, tal como se demuestra en causa Rol 1133-2006, caratulados *Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile*: en causa Rol 4067-2006, caratulados “*Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile*” y otros.

Por último, en subsidio de las excepciones y/o defensas anteriores, alega exceso en el monto de indemnización pretendido. Al tener la indemnización de perjuicios por daño moral una finalidad meramente satisfactiva que tenga por objeto atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida, no resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o demandado para fijar su cuantía, debiendo en su estimación atenerse solo a la extensión del daño sufrido por la víctima, fijando el quantum conforme al principio de prudencia que conduce la proporcionalidad, tal como fue señalado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol Corte 6891-2013, caratulados *Miranda con Fisco*.

A su vez, en subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, solicita que la regulación del daño moral considere los pagos recibidos del Estado y que los montos establecidos por el Tribunal guarden armonía con éstos, puesto que el demandante ha recibido pago a través de los años, a título de pensión por parte del Estado, así como de prestaciones no



Foja: 1

monetarias, las cuales seguirá percibiendo y que han sido concedidas conforme a la Ley N°19.992, más normativa pertinente. Indica que, de no accederse a esta petición, existiría un doble pago por el mismo hecho, lo cual contraría los principios básicos del derecho que no admiten que un daño sea indemnizado dos veces. Por otra parte, estima pertinente que la regulación del daño moral considere un parámetro válido, los montos establecidos en sentencias de otros Tribunales respecto a la misma materia, por lo cual se debe rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Por último, en caso de acogerse la demanda, los reajustes sólo podrán contarse desde exista sentencia firme o ejecutoriada, pues antes no existió ninguna obligación que el Fisco se encuentre obligado a indemnizar. En igual sentido y conforme lo dispone el artículo 1551 del Código Civil, siendo exigible el cumplimiento de la sentencia desde que adquiere su carácter firme y ejecutoriada, incurriendo en mora solo a partir de ese momento, el cobro de los intereses solo procede desde ese momento.

Finalmente, como petición concreta, solicita el rechazo de la demanda, conforme a las excepciones y defensas opuestas, con expresa condena en costas, o en subsidio, solicita la rebaja sustancial del monto de indemnización pretendido por la parte contraria.

TERCERO: Con fecha 14 de abril del 2019, a folio 10, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica.

Al replicar la excepción de reparación integral de la demandada, cita los considerandos décimo y undécimo de la sentencia de la Excm. Corte Suprema en causa rol 796-2016, caratulados “*Pinto con Fisco de Chile*”, en que se estimó improcedente imputar a la indemnización debida a la demandante de esa causa las reparaciones y pensiones que percibió en su calidad de preso o exonerado político. Señala los hechos de la demanda se desarrollaron durante la dictadura militar en que el Estado amparó y financió agentas para violar derechos humanos y que lo sufrido por el demandante fueron crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, se debe estar a lo dispuesto en el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República y aplicar plenamente las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, en especial el artículo 63.1 en que conjuntamente con la reparación, la persona vulnerada en sus derechos por el Estado tiene derecho al “*pago de una justa indemnización*”. En tal sentido, indica que la alegación sostenida por la demandada que las pensiones otorgadas a su representado son indemnizatorias, atenta contra el Derecho Internacional. Además, contradice el orden interno, puesto que el artículo 24 inciso primero de la Ley N°19.123 señala que “*La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario*”. Refuerza su argumento, citando el considerando décimo de la sentencia causa Rol C-30539-2009 del 7° Juzgado Civil de Santiago y el considerando cuarto de la sentencia emanada del 1° Juzgado Civil de Valdivia, causa Rol C-21-2017. De esa forma, concluye que la normativa invocada por el Fisco, no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que su parte persigue y no es procedente suponer que dicha normativa se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación y que las asume el Estado voluntariamente, no suponiendo una renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare legalmente su procedencia, siendo la única limitante para reclamar el daño ocasionado por el actuar de agentes del Estado, es acreditar la efectividad de dicho detrimento y la relación con la víctima.

En cuanto a la excepción de prescripción, indica que la aplicación del derecho común, remitiéndose a cualquier cuerpo de normas que la regule, resultaría un incumplimiento por parte del Estado de Chile a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Vuelve a reforzar esta postura citando el considerando tercero de la sentencia del 1° Juzgado Civil de Valdivia en causa Rol 21-2017 en que se señala que la interpretación de las normas no puede ignorar la regulación de los Tratados de Derecho Humanos, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Al citar la sentencia del 7° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C- 1306-2013, caratulados “*Guajardo con Fisco de Chile*”, se coloca el acento que en virtud del artículo 5° de la Carta Fundamental, el respeto y promoción de los derechos humanos



Foja: 1

reconocidos en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado de Chile son incorporados al ordenamiento interno y se convierte para éste en un imperativo que deberá ser abordado desde el ámbito del Derecho Público, cuyo so pena de involucrar responsabilidad internacional. A mayor abundamiento, cita los fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 6715-2002 “*Carrasco con Fisco de Chile*” y de la Corte Suprema Rol 2289-2015 y concluye que todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son de derecho público, constituyendo *jus cogens*, declarando que: “*el Estado de Chile no puede pretender eludir su responsabilidad en el presente caso, dado que, atendido principalmente el artículo 5 de la Constitución Política de la Republica, un límite a la soberanía y por tanto al derecho interno lo constituye justamente los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, tornándose inadecuada la aplicación del Código Civil chileno, que entro en vigencia en 1857, para resolver casos de violencia internacionales, masivas y sistemáticas a derechos esenciales de un sector de habitantes del Estado. Tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas de prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraria la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrantes del ordenamiento jurídico internacional por disposición del inciso segundo del Artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez en orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama*”.

Recalca que los hechos de autos son un crimen de lesa humanidad, el cual fue un término utilizado desde 1915 y en declaraciones posteriores a la primera guerra mundial y fue adoptado en los Estatutos del Tribunal Penal Internacional de Núremberg tras la insuficiente que resultaba la categoría de crimen de guerra, admitiéndose como una cuestión de “*orden público de la comunidad internacional*”, reconociendo el respecto de los derechos fundamentales como una obligación *erga omnes*, tal como consta en el caso de la Corte Internacional de Justicia *Barcelona Traction light & Power Co*, el cual estimó que algunas obligaciones internacionales son tan básicas que todos los Estados tienen el deber y derecho a proteger su cumplimiento, siendo su violación una lesión a todos los demás Estados, incluso aquellos que no se ven directamente o especialmente afectado por esa conducta, siendo una obligación *erga omnes* oponible a todo el género humano.

En cuanto al daño moral por vulneración a los derechos humanos, reitera que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba.

Al tratar la responsabilidad del Estado señala que siempre es directa, institucional, no siendo vicaria o por el hecho ajeno y de derecho público, sin que sea aplicable el derecho común en aquellos casos en que el Estado a través de sus órganos actúa ilícitamente y causa daño a un particular, vulnerando sus derechos y libertades fundamentales. Se caracteriza por ser una responsabilidad constitucional que tiene por objeto que se respete el ejercicio de la función estatal conforme a la Constitución, en su plenitud, por tanto, se debe resarcir, compensar o restituir a la víctima de los daños cometidos por el Estado en su actividad, quién no se encuentra obligada jurídicamente a soportarlo, mucho menos si la Constitución y las leyes dictado conforme a ella, lo han previsto, consentido. Así, no es una responsabilidad personalísima, sino que recae en la persona jurídica del Estado, por ende, no es aplicable la estructuración clásica de responsabilidad de culpa o dolo, sino de la causalidad material de un daño antijurídico producido por el actuar de un órgano del Estado. Finaliza señalando que es una responsabilidad *integral*, en que deba repararse todo el daño producido injustamente a la víctima.

CUARTO: Con fecha 29 de abril del 2020, la demandada evacuó el trámite de la réplica. Ante la réplica, responde que la parte demandante ya fue indemnizada al tenor de la excepción de reparación satisfactiva que demuestran la reparación íntegra de que han sido objeto don Eduardo Rojas López, en lo económico, salud, educación, y en el ámbito moral y satisfactor,



Foja: 1

en base a una normativa que fue dictada con la finalidad expresa de atender en su integridad el resarcimiento de las víctimas de delitos de lesa humanidad, acogiendo las directrices del derecho humanitario que impone a los Estados la obligación de establecer programas de reparación del daño causado. El Estado de Chile ha cumplido su obligación ante la comunidad internacional de sancionar a los responsables y reparar a las víctimas y sus familiares, tal como ha sido reconocido internacionalmente, en especial la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Reitera que la acción de autos se encuentra inserta en el contexto de la justicia transicional, respecto a cuya regulación se demuestra que el demandante optó a los beneficios reparatorios de la Ley 19.992 y sus modificaciones, el cual ha sido claro en comprender en forma el daño moral en forma expresa y en establecer la incompatibilidad de sus beneficios con las pretensiones de una acción judicial centrada únicamente en lo económico, como lo dispone su artículo 2°.

Por otra parte, el artículo 4° de la Ley 19.992, establece la compatibilidad de la pensión de reparación que allí se contempla con otra pensión, únicamente para el caso de que estuviese adscrito en algún régimen previsional, y con la finalidad de que no perdiera la posibilidad de alcanzar la correspondiente pensión o jubilación.

En cuanto a la excepción de prescripción, indica que siendo una acción exclusivamente pecuniaria, que persigue una suma de dinero y ningún otro aspecto en lo integral, no hay fundamento alguno que justifique la imprescriptibilidad, dado que no hay tratado, convención o declaración del derecho humanitario que establezca e imponga una acción indemnizatoria ilimitada en el tiempo. Señala que la analogía o la coherencia que alega en algunos fallos no tiene la suficiente claridad o sustento para entender las responsabilidades penales y civiles en caso de delitos de lesa humanidad, alegando que la doctrina y jurisprudencia es uniforme y clara solo sobre la imprescriptibilidad de las acciones penales que persiguen tales ilícitos, lo cual se ve refrendado por la existencia de tratados que así, en forma expresa, lo establecen. Sin embargo, ello no ocurre en la parte civil derivada de los mismos.

Por último, en cuanto a los montos demandados, su parte reitera que son excesivos, considerando que no hay cambio de razonamiento en los montos fijados en otras causas, en las cuales también se sostuvo su desproporcionalidad.

QUINTO: Que con fecha 17 de mayo del 2019, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales pertinentes y controvertidos los siguientes: “1- *Fecha y circunstancias de la detención y tortura de don EDUARDO OSCIEL ROJAS LOPEZ*; 2- *Participación culposa o dolosa de agentes del estado en la detención y tortura del demandante*; 3- *Efectividad que don EDUARDO OSCIEL ROJAS LOPEZ, fue reconocido como víctima de violación a los derechos humanos por el Estado de Chile*; 4- *Existencia, naturaleza y monto de los perjuicios demandados por el actor*; 5- *Efectividad de que la indemnización alegada por el demandante ya ha sido reparada por el Fisco de Chile, términos, monto y fecha de dicha indemnización*; 6- *Efectividad que la acción de indemnización de perjuicios deducida por el demandante de autos se encuentra prescrita. Hechos constitutivos de dicha prescripción*”.

SEXTO: Que, el artículo 1698 del Código Civil prescribe que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.

En tal sentido y a fin de acreditar sus aseveraciones, la demandante rindió prueba documental, acompañada con las debidas formalidades legales, bajo apercibimiento legal, consistente en:

1.- Copia emitida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la sentencia de 16 de julio de 1981, Rol 75-1981 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que condenó a la pena de relegación en la localidad de Coelemu a don Eduardo Osciel Rojas López.

2- Declaración jurada de don Carlos Osman Barrera Hidalgo, cuya firma fue autorizada por el Sr. Notario Público don Félix Jara Cadot, con fecha 25 de junio del año 2019.



Foja: 1

3.-Extracto de Nomina de Personas Reconocidas como Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech).

4.- Nomina de personas reconocidas como víctimas de Prisión Política y Tortura, Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

5.- Informe realizado por Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos ILAS, sobre situaciones represivas y experiencias traumáticas de tortura, secuestros, desapariciones forzadas, relegación, amedrentamiento y allanamiento sufridos por violaciones a los derechos humanos durante los años 1973 y 1990; Sobre duelo de familiares de Ejecutados Políticos; Familiares de Detenidos Desaparecidos: ¿Duelo posible o imposible?; Efecto en los hijos: Trauma Relacional Temprano.

6.- Informe de la Vicaria de la Solidaridad (Confidencial) de Marzo del año 1981. Primera Parte: Estadísticas y Situación Judicial respecto a detenciones, tortura, abuso de poder, expulsión y exilio. En detenidos por provincia; Cárcel de Antofagasta, página 10, figura entre los detenidos don Eduardo Osciel Rojas López. En le período, se observa un aumento en la aplicación de relegaciones.

SÉPTIMO: Que, por su parte, la demandada rindió como prueba instrumental no objetada:

1.- Oficio Ord. N°58291/2019 del Departamento Secretaría General y Transparencia Instituto de Previsión Social que informa beneficios Leyes N°19.992 Y N°20.874 de don Eduardo Osciel Rojas López en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura. Se informa que desde el 01 de febrero del año 2005 hasta marzo del año 2019 recibió por concepto de pensión un total de \$25.078.051.- pesos y por aguinaldos dentro del mismo período la suma de \$433.175, además de un aporte único de reparación Ley N°20.874.- por la suma de \$1.000.000.-

OCTAVO: Con fecha 09 de agosto del 2019, es ingresado materialmente por el Tribunal oficio de Fundación de Ayuda Social de Las Iglesias Cristianas, emitida por su Secretario Ejecutivo, don Claudio González U, llamado que “La Tortura es un Problema Médico de Equipo de Salud Mental”. Respecto a las secuelas de víctimas de tortura, se señala que la mayoría de los pacientes *“se observada que la sintomatología angustiosa es siempre la más relevante, acompañada de síntomas paranoideos (persecutorios) y trastornos del sueño. Ha llamado también la atención la casi constante presencia de elementos depresivos que reviste, en algunos casos, carácter grave. Se ha diagnosticado también un número significativo de estados psicóticos agudos, transitorios: y en menor frecuencia han aparecido síntomas psicossomáticos y alteraciones en la esfera sexual. Otro tipo de perturbación emocional es la que se manifiesta como la reiteración angustiosa y agobiante del recuerdo de la tortura”*. En otros párrafos se indica que: *“El problema que merece ser destacado, de manera especial, es la existencia en algunos ex detenidos, de un padecimiento emocional prolongado, generalmente poco aparente y que daño y limita la vida psíquica sin que muchas veces la persona llegue a tener una clara conciencia de esta limitación. En nuestra opinión, la presencia de una perturbación de este tipo-poco aparente o lavada-puede estar ligada a una dificultad para compartir y comunicar la experiencia, y por lo tanto una dificultad para comprenderla y elaborarla en todos sus alcances y significados. Una experiencia tan aberrante que produjo tanto el impacto emocional y psicossomático, requiere de un completo proceso de reconocimiento y autocomprensión.*

El informe define trauma como *“perforación o rotura; aquello que se rompe o se hiere pierde algo de su integridad y/o estabilidad estructural..., un acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a el adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. Una de las propiedades naturales de lo subjetivo es su capacidad de olvidar, desplazar o recuperar lo vivido, sin embargo, en la memoria traumatizada los recuerdos se mantienen vívidos en el registro mémico “Por ello, aunque pasen muchos años, el recurso se mantiene en la memoria como si el acontecimiento hubiese ocurrido recién ayer. La conflictividad se mantiene viva y resurge con frecuencia en la vida social como si no pudiéramos salir dl circuito de una memoria traumática*



Foja: 1

que vuelve sobre sus huellas desde los lugares más dispares...”. Según la Dra. Paz Rojas, los mecanismos de retención de la memoria en aquellos traumas que afectan al conjunto de la sociedad tenderán a predominar sobre el olvido, dificultándose la elaboración.

En cuanto al contenido del trauma de los pacientes atendidos por torturas, señalan que ellos se quejan en concreto de “*pesadilla, hipervigilancia, angustia, temores que son flotantes (a cualquier cosa que se activan en cualquier minuto) y también del quiebre del proyecto de vida. En el tratamiento empiezan a cuestionar la vida que ha sido y si valió la pena o no el sacrificio*”.

NOVENO: Que la acción de indemnización de perjuicios en comento se ha interpuesto como consecuencia de actos de detención ilegal, apremios ilegítimos y tortura cometido por agentes del Estado durante el período de la dictadura militar, configurándose en toda regla un caso de responsabilidad extracontractual del Estado por violación a los derechos humanos, los que por su importancia determinan nuestro orden Constitucional e impregnan hacia el resto del ordenamiento normativo, trascendiendo más allá del ámbito jurisdiccional y político, toda vez que son aquéllos derechos consustanciales a la dignidad de ser reconocido como persona y humano, siendo pilar de toda organización social y política de un Estado su respeto y promoción. Por tal motivo y como base de nuestra institucionalidad, los derechos humanos son antepuestos al ejercicio del poder y la soberanía, tal como lo consagra en su inciso segundo artículo 5º nuestra Constitución Política de la Republica, por tanto, su regulación escapa del ámbito de aplicación de las normas del derecho común civil, correspondiendo que su interpretación sea en forma sistemática, conforme a la equidad y los principios generales de derecho.

DÉCIMO: Que debiendo primero emitirse pronunciamiento sobre los presupuestos de procedencia de la acción, esto es la excepción de prescripción, se debe tener presente que estando en el centro de la actividad del Estado el resguardo de la persona y su dignidad, el respeto y promoción de los derechos humanos se torna en uno de los deberes fundamentales de un Estado de Derecho. La violación de los derechos humanos más consustanciales a la dignidad humana, que ese mismo Estado cometa en forma instrumental, coordinada, organizada y sistemática en contra de sus mismos habitantes, nacionales o ciudadanos, como los ocurridos en el período de la dictadura militar, en que se cometieron numerosos delitos de lesa humanidad, se torna en un quebrantamiento tan profundo en la institucionalidad que se produce una fractura en la memoria histórica y cohesión social de un pueblo que ameritan hacer efectiva la Responsabilidad de Estado de una forma mucho más firme y decisiva que otros casos de alteración del orden social.

UNDÉCIMO: Que, en tal sentido no es posible considerar que la Responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos, cometidas por agentes del Estado (en forma consciente coordinada, organizada y sistemática) constitutivos de delito de lesa humanidad sea un asunto de orden privado, siempre será una materia de orden público, en que por razones de restablecimiento de sus paz y reconciliación de sus habitantes se requiere hacer efectiva la responsabilidad institucional del Estado. Además, que un Estado que se precie de ser de Derecho debe hacer efectiva su responsabilidad por los actos que sus miembros, órganos y representantes cometan. En el contexto histórico nacional de la cooptación de la dirección del Estado y sus organismos por fuerzas de facto, no elegidas mediante procesos electorales transparentes y representativos durante un período de tiempo extenso, aplicar la institución de la prescripción hace ineludible que las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de Estado queden en la impunidad.

DUODÉCIMO: Que, señalado lo anterior, siendo el resguardo a la dignidad de la persona humana y sus derechos más esenciales anteriores al Estado, cuya trascendencia va más allá del ámbito jurídico, de un contenido antropológico, ético, espiritual y atemporal, se convierte en una necesidad de orden público más primordial que la certidumbre en las relaciones y situaciones jurídicas. Por lo tanto, resulta armónico y coherente a los principios y normas del Derecho Internacional Público y al Derecho Constitucional que las acciones de responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos tengan un carácter imprescriptible.



DÉCIMO TERCERO: Que, la comunidad Internacional ha construido una robusta organización destinada a la promoción y protección de los derechos humanos a la cual ha adherido el Estado Chileno mediante la suscripción de los Tratados Internacionales sobre la materia.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos de año 1969 (Pacto de San José de Costa Rica) coloca a los derechos humanos antes que el Estado y sus propios intereses, es más, se eleva a un valor superior al interés de cada persona. Reconoce en su preámbulo que *“los derechos esenciales del hombre no nacen de un determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual se justifica una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos. Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional”*. A continuación, en el artículo 1. establece la obligación de los Estados Parte a respetar los derechos y libertades que la Convención reconoce en los siguientes artículos, sin discriminación alguna y en su acápite 2., indica *“Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”*. Así de forma lógica y consistente, a continuación, impone el deber de cada Estado Parte de comprometerse *“a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”*. A su vez, en su artículo 27, sobre suspensión de garantías expresamente señala: 1. *En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.* 2. *La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.* Respecto a la correlación de los deberes y derechos de las personas, en su artículo 32 indica que *“1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”*. De ese modo, mediante la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se permitió la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cuya competencia el Estado de Chile se encuentra sometida por su firma y ratificación mediante depósito con fecha 21 de agosto del año 1990.

En consonancia y armonía con dicho Tratado y otros anteriores sobre la materia, el artículo 5° de nuestra Carta Fundamental consagra *“La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”*.

Así, en base a los principios de humanidad y dignidad insertos en el orden jurídico internacional y nacional, la Excma. Corte Suprema ha entendido que son imprescriptibles las acciones derivadas de delitos de lesa humanidad; en causa Rol 30163-2014, de fecha 28 de enero



Foja: 1

del 2015, expresa de forma más elocuente en su considerando quinto: *“Que es un hecho indesmentible que el derecho internacional ha evolucionado en base a los principios que lo inspiran y que lo llevan a reconocer la existencia de cada vez mayores y más complejos escenarios en los que se cometen delitos contra la humanidad y que exceden a los conflictos armados o de guerras declaradas, precisamente, porque tales enfrentamientos ya no son lo que fueron al nacimiento de los conceptos de crimen de guerra y delitos de lesa humanidad, fraguados hacia la década de 1940, en plena segunda guerra mundial y usados en sentido no técnico desde antes, en 1915. Esta evolución, marcada por las innumerables formas que han ido adquiriendo los delitos que atentan contra el ser humano, ha llevado a diversos autores a precisar que los delitos de lesa humanidad pueden ser cometidos tanto en tiempo de guerra como de paz, como expresamente se ha reconocido en el artículo 1 letra b) de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad de 26 de noviembre de 1968; y, más tarde, en el artículo 3 del Estatuto del Tribunal para Ruanda de 1994 y el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de 1996, así como en el artículo 7 del Estatuto de Roma de 1998. A propósito del primer proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1954, ya entonces se concedió autonomía al delito de lesa humanidad, desvinculándolo del contexto bélico. Para esa fecha había sido conceptualizado como "los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia". Al referido concepto se ha agregado que las acciones deben ser "parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque", cuestión que aparece suficientemente demostrada en los antecedentes de esta causa, si se tiene en cuenta la persecución y secuestros probados. Atendiendo a las reflexiones anteriores puede decirse que son crímenes de lesa humanidad aquellos ilícitos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad del hombre, de suerte tal que para su configuración existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, que contraría de forma evidente y manifiesta el más básico concepto de humanidad, destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente. En definitiva, tales hechos constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes. Entre las características que distinguen este tipo de transgresiones se destacan la imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. De este modo, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos investigados en la presente causa y tal como fueron presentados en el fallo que se revisa, así como el contexto en el que indudablemente deben inscribirse y la participación de miembros del Estado en ellos, no cabe duda alguna que deben ser subsumidos a la luz del derecho internacional humanitario dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad y que se deben penalizar, pues merecen una reprobación tan enérgica de la conciencia universal, al atacar contra los valores humanos fundamentales, que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular.*

En ese mismo sentido, la Excm. Corte Suprema consagra la imprescriptibilidad de cualquier acción en la materia, sin distinción de su naturaleza penal o civil, colocando el acento en la eventual responsabilidad internacional que podría incurrir el Estado de Chile, en caso de acoger la prescripción, declarando: *“...Decimoquinto: Que sin perjuicio de lo razonado en la sentencia que se revisa, en reiterada jurisprudencia esta Corte ha sostenido que, tratándose de un delito de lesa humanidad lo que en la especie ha sido declarado , cuya acción penal persecutoria*



Foja: 1

es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973 1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. (En este mismo sentido, SCS N°. 20.288 14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras). Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigualado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente. Por otra parte, la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional, y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, pues, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado. Decimosexto: Que en el caso en análisis, dado el contexto en que los ilícitos fueron verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción por el transcurso del tiempo de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado”. (C. Suprema, 11 de enero del 2016, Rol 7741-2015, considerandos 15° y 16°). El mismo pronunciamiento, lo ha reiterado en otros fallos sobre la misma materia (C. Suprema, 29 de diciembre del 2015, Rol C-22856-2015, considerandos 4° al 8°; C. Suprema, 21 de diciembre del 2015, Rol 9652-2015, considerandos 4° al 9°; C. Suprema, 14 de septiembre del 2015, Rol 1092-2015, considerandos 3° al 6°; C. Suprema, 08 de junio 2016, Rol 14343-2016, considerandos 4° al 10°; C. Suprema, 29 de marzo del 2016, Rol 2289-2015, considerandos 7° al 10°; C. Suprema, 21 de julio del 2016, Rol 20580-2015, considerandos 5° al 8°).

DÉCIMO CUARTO: Que así, en base a lo anteriormente expuesto, estimándose conforme a derecho que las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad cometido por agentes del estado son imprescriptibles, se rechazará la aludida prescripción.

DÉCIMO QUINTO: Que asentado lo anterior y del examen de los antecedentes aparece de manifiesto que son hechos de la causa, por no haber sido controvertidos por las partes, lo siguiente:

1.- Con fecha 15 de marzo del año 1981, el demandante, don Eduardo Osciel Rojas López fue detenido dentro de su domicilio en la ciudad de Calama. Hombres de civil lo esperaron en su comedor con pistolas y metralletas, siendo tirado en el piso y agarrado a golpes, además de robar ahorros en dinero que guardaba en su colchón. Desde ese lugar, fFue trasladado a un cuartel de la CNI, lugar en que fue desnudado y vejado mediante tortura de golpizas y asfixia mediante sumersión en el agua. En los días siguientes, siguieron los golpes, las vejaciones corporales y mentales; fue torturado mediante descargas de corriente eléctrica por colocación de electrodos en su cuerpo. El día 20 de marzo de ese mismo año, fue traslado a Antofagasta a la Escuela de Carabineros en que fue golpeado hasta perder la conciencia. En ese lugar, ocurrió la peor tortura, un día fue obligado a comer excremento mientras estaba desnudo y era insultado por los agentes del Estado; a las dos horas siguientes fue colocado la mitad inferior de su cuerpo sobre una mesa fría y sin apoyo en el aire el tronco superior de su cuerpo



Foja: 1

en donde cada vez que era interrogado, liberaban el apoyo de la parte superior del cuerpo mientras le fue enterrado un fierro en el ombligo. Las amenazas, golpes y torturas siguieron en los siguientes traslados a la cárcel de Antofagasta. El día 01 de agosto fue trasladado a la Serena y el día 04 de agosto fue cambiado a la Penitenciaria de Santiago. Posteriormente el 30 de agosto fue llevado a la cárcel de Concepción, nuevamente el día 04 de septiembre de ese año fue trasladado por 4 días a la cárcel de Lautaro.

2.- Que mediante sentencia de fecha 16 de julio del año 1981, en causa Rol 75-1981, la Corte de Apelaciones de Antofagasta condenó a don Eduardo Ociel Rojas López a la pena de relegación en la localidad de Coelemu por 541 días.

3.- Que las secuelas de las torturas y detención ilegal sufrida por el demandante, tuvo consecuencias permanentes hasta la presente fecha.

4.- Que el demandante fue reconocido como víctima de Prisión Política y Tortura, afectada directamente por violaciones a los derechos humanos.

5.- Que en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura recibió beneficios en virtud de las Leyes N°19.992 Y N°20.874

DÉCIMO SEXTO: Que así, conforme a lo probado y reconocido, las acciones delictuales de autos fueron cometidas por agentes del Estado; siendo su actuar una contravención directa a las normas del Derecho Internacional y la Constitución Política de la República, generándose una responsabilidad por parte del Estado de carácter institucional.

En tal sentido, el Estado de Chile efectuó un reconocimiento de haber cometido estos ilícitos a través de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, más conocida como “Comisión” Valech. Así, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República, la responsabilidad del Estado de Chile se encuentra limitado por el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, recogiendo y aplicándose entonces lo preceptuado en el artículo 38 de nuestra Carta Fundamental y el artículo 4 de la Ley 18.575, toda víctima tiene derecho a ser reparada en los daños causado, pues *“el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar a los funcionarios que las hubiere ocasionado”*.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de esta manera, encontrándose acreditados los ilícitos, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención y tortura de la víctima, no habría tenido lugar si la intervención de agentes del estado no se hubiera producido, sólo queda dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en la detención ilegal, tortura física y psicológica sufrida por el demandante, respecto a los hechos relatados.

DÉCIMO OCTAVO: Que la responsabilidad trae consigo la indemnización de los perjuicios causados, reparación que se ha solicitado respecto del daño moral sufrido por el actor.

DÉCIMO NOVENO: Que previamente a iniciar su determinación, debiendo dilucidarse la excepción de reparación satisfactoria opuesto por la parte demandada, la cual alegó que el actor es beneficiario de las prestaciones ideadas por el Estado a través de las Leyes N°19.992 y N°20.874, existiendo en razón de ello una reparación al daño, esta Magistratura considera que la calidad de víctima no es excluyente de la pretensión indemnizatoria de la presente acción, toda vez que las medidas de las leyes indicadas fueron creadas de forma general sin consideración a cada caso en particular, sin poder presumir que el Estado a través de dichas efectuará una reparación íntegra del daño causado. A mayor abundamiento, que el Estado asuma su participación y colaboración en los hechos y pretenda el cumplimiento del deber de resarcimiento para con las víctimas, no importa para ellas la renuncia de sus formas, ni exclusión de otras medidas de reparación.

VIGÉSIMO: Que, en el mismo sentido, tampoco puede considerarse excesivo el monto pretendido, pues es indudable la circunstancia que el hecho causa agravio al actor, provocando



«RIT»

Foja: 1

en el actor una influencia negativa en el desarrollo de vida por largo tiempo y tuvo una incidencia negativa en su desarrollo emocional, laboral y familiar, además de dejar secuelas físicas y psicológicas permanentes.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que como se ha expresado, la pretensión del actor es que por concepto de daño moral se condene al Estado de Chile al pago de la suma de \$300.000.000.- millones.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que como se ha expresado, el demandante a la fecha de la demanda ha percibido, por diversos conceptos reparación de carácter integral y satisfactiva, por un total que a la fecha de esta sentencia ascienden a la suma de **\$26.511.226.- pesos**, en consecuencia a partir del monto reclamado, que se otorgará por concepto de indemnización, se le descontará lo que hasta la fecha de esta sentencia se le ha reconocido y asignado por ley como pago reparatorio.

VIGÉSIMO TERCERO: Que la referida cantidad ordenada pagar, se efectuará con el reajuste del Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo. Respecto del interés solicitado, atendido que las sumas indemnizatorias provienen de un resarcimiento moral, no siéndole aplicables en la especie el artículo 1559 del Código Civil ni las normas de la Ley 18.010 al no ser una operación de crédito, siendo improcedente la aplicación de intereses, ni siquiera de aquéllos que la ley denomina corrientes.

VIGÉSIMO CUARTO: Que habiendo tenido la demandada motivos plausibles para litigar, cada parte soportará sus costas.

Por estas consideraciones, y vistos además, lo dispuesto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Leyes N°19.992 y N°20874; artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38° de la Constitución Política de la República; 4° Ley N°18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado; 144, 170 y 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **SE DECLARA:**

I.- Que se acoge la demanda de fecha 18 de febrero del 2019, a folio 1 y se condena al demandado, **Fisco de Chile** a pagar indemnización de perjuicios por daño moral al demandante **don Eduardo Osciel Rojas López** la suma de \$300.000.000.-, con los reajustes que se indican en la consideración vigésimo tercera, previa deducción de la suma de \$26.511.226.-, señalada en el motivo vigésimo segunda.

II.- Que cada parte soportará sus costas.

Regístrese.

PRONUNCIADO POR DOÑA JACQUELINE IVETTE BENQUIS MONARES,
JUEZ TITULAR DEL DECIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticuatro de Abril de dos mil veinte**

